

Los riesgos del establecimiento de una soberanía difusa en la Amazonía: el rol de los actores violentos no estatales

Tássio Franchi¹ e Lucas Barreto Rodrigues²

Resumen ejecutivo

En los últimos años, Sudamérica ha atraído la atención global no sólo por su importancia socioambiental, sus aspectos culturales y económicos, sino también por los complejos retos relacionados con la seguridad y la gobernanza. La región se enfrenta a un conjunto multifacético de problemas, siendo el Crimen Organizado Transnacional uno de los retos comunes a los que se enfrentan los países de la región. El tráfico de drogas, en algunos casos, ha empezado a subvencionar delitos ambientales y a integrarse aún más en las economías locales. El aumento de las demandas internacionales e internas de ciertos tipos de drogas ha ampliado las zonas de plantación y las rutas hacia el interior del continente, de modo que la violencia ya no es exclusiva de los grandes centros urbanos, sino que ha alcanzado el interior de los países y sus fronteras. En este sentido, las organizaciones criminales han establecido una red integrada a nivel transcontinental que, si se compara con la integración regional de los Estados del continente, demuestra que los países de la región aún no han establecido políticamente nada que sea eficaz para combatir a estos grupos.

En Sudamérica se utilizan tres fronteras geográficas para unir a los países: el Cono Sur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay); los Andes (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela); y la Amazonía (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela). Estas regiones, por sus características naturales, redes de integración e historias, contribuyen al acercamiento entre países y delimitan espacios donde se configuran acuerdos políticos, comerciales y de cooperación.

Las dos primeras tienen en común que son regiones con redes de ciudades hermanadas, hidrovías, carreteras y ferrocarriles que conectan diferentes puntos de los países. Los procesos históricos de ocupación y ciertas características naturales han promovido un crecimiento económico y demográfico que ha facilitado la integración entre los países e, internamente, entre parte de las fronteras con sus capitales.

La región amazónica es diferente de las otras dos en diversos aspectos. La densidad de población de las regiones costeras del continente no ha alcanzado las fronteras de la Amazonía Occidental, y la creación de una red urbana y viaria densamente integrada, capaz de conectar las economías nacionales y crear polos de desarrollo, es también un ciclo aún incompleto.

1. Doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasília; profesor del Instituto Meira Mattos – Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3434-5560>; e-mail: tasfranchi@gmail.com.

2. Tiene maestría y es estudiante de doctorado en Ciencias Militares – Instituto Meira Mattos – Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7208-5443>; email: barreto20695@gmail.com.

La extensa cuenca hidrográfica del río Amazonas y su red de vías navegables es una característica única de la región, que convierte a los ríos en carreteras. Pero problemas como la estacionalidad de los ríos y la falta de una infraestructura portuaria eficiente la han limitado. Además, la red hidrográfica tiene sus limitaciones naturales, ya sea por la pérdida de navegabilidad y los ríos anegados que aparecen cuando se empieza a ganar altura navegando río arriba; ya sea porque países enteros, o regiones importantes de estos países, no están conectados a la cuenca Amazónica propiamente dicha, como los países del Escudo Guayanés. El hecho es que nunca ha existido un bloque económico centrado en los países que integran el condominio amazónico. Iniciativas como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) tienen un alcance y una implicación política limitados.

La Amazonía y sus porosas fronteras favorecen las actividades ilegales. La ausencia estatal efectiva en muchas zonas facilita la actuación de grupos armados y redes criminales. Estos grupos no sólo controlan la producción y el tráfico de drogas, sino que también financian y, circunstancialmente, protegen actividades como la deforestación ilegal, la pesca indiscriminada y la minería, entre otros delitos, con el consiguiente impacto sobre el medio ambiente y las comunidades. La fusión de estas actividades y la llegada de Actores Violentos No Estatales a este proceso podría crear el riesgo de establecer una soberanía difusa en la Amazonía. Este texto aborda esta cuestión y subraya la necesidad de enfoques integrados para hacer frente a estos retos, garantizando la seguridad y la sostenibilidad de la región.

Recomendaciones:

- Promover diálogos bilaterales y multilaterales entre los países amazónicos para diagnósticos integrados;
- Intensificar el intercambio de información de inteligencia y la planificación operativa conjunta de acciones en las regiones fronterizas;
- Buscar la construcción de alternativas económicas para las poblaciones fronterizas;
- Fomentar una acción más proactiva de la OTCA en temas de seguridad ambiental e internacional que afectan a la Amazonía.

Palabras clave:

Soberanía; Crimen Organizado Transnacional; Delitos Ambientales; Actores Violentos No Estatales; Amazonía.

1. Impacto del crimen organizado transnacional en Sudamérica

Los impactos del Crimen Organizado Transnacional (COT) en Sudamérica, especialmente en los países amazónicos, son amplios y multifacéticos. El COT interconecta diferentes tipos de delincuencia, creando un ciclo que sustenta un ecosistema criminal que afecta a Estados, instituciones, sociedades e individuos (Figura 1). El narcotráfico es uno de los motores de este ciclo, ya sea por ser una actividad altamente lucrativa o por razones históricas, al ser una actividad común entre diferentes actores.

La asociación de Actores No Estatales Violentos con delitos ambientales ha aumentado en el siglo XXI (FBSP, 2023). En la Panamazonía, rica en recursos naturales y con insuficiente presencia de actores responsables por el monitoreo y la represión, son frecuentes los delitos ambientales como la deforestación y la minería ilegal, actividades que a veces son financiadas y protegidas por redes criminales. Estos delitos tienen un impacto sobre el medio ambiente y las comunidades locales, como queda claro en el caso de la minería en la Tierra Indígena Yanomami en Brasil (Rodrigues, 2024); los impactos en la región de Madre de Dios, en Bolivia (Zapata, 2020); o en la cuenca del río Putumayo-Içá, que abarca Colombia, Ecuador, Perú y Brasil (Botía, 2017).

La corrupción multisectorial facilita la actuación del COT, infiltrándose en gobiernos e instituciones, lo que debilita la capacidad de los Estados para aplicar políticas de seguridad eficaces. El resultado es un aumento de la violencia y de los homicidios dolosos, trágicas consecuencias del crimen organizado.

Figura 1. Impactos del Crimen Organizado Transnacional sobre las Naciones



Fuente: Elaboración propia.

Entre los datos de homicidios intencionales en Sudamérica publicados por UNODC (2024), la tasa media de homicidios en el Cono Sur es de 7,15 por 100 mil habitantes si se incluye Brasil, pero desciende a 3,03 sin Brasil. En comparación, la media de los países amazónicos es de 12,89, cuatro veces más que el caso del Cono Sur en que excluimos a Brasil, o casi un 50% más que cuando incluimos al país. La explosión de violencia en Ecuador, impulsada por la lucha contra el crimen organizado, se tradujo en 26,99 homicidios por cada 100 mil habitantes en

2022, seguido de Colombia, con 25,27 homicidios. En tercer lugar, se encuentra Brasil, con 20,61 muertes por cada 100 mil habitantes (Tabla 1).

Además de ser países amazónicos, también comparten la presencia de Actores Violentos No Estatales que se disputan el control de actividades lícitas e ilícitas, con rutas y destinos variados. Estas disputas pueden verse parcialmente en los datos sobre homicidios dolosos en estos países. Los datos de la ONU muestran que la media mundial de muertes relacionadas con el crimen organizado es del 22%. En las Américas, esta tasa se eleva al 50% de homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, y al 20% con otros delitos conexos; es decir, casi el 70% de las muertes están relacionadas con delitos y no con guerras, crímenes pasionales o delitos políticos (UNODC, 2023b).

Tabla 1. Tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes (2012-2022)

	País/Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Media
Amazonía	Ecuador	10.97	14.08	10.84	2.15	2.35	1.62	1.72	1.88	14.02	26.99	12.89
	Colombia	33.35	28.59	27.13	26.04	25.43	23.88	23.41	22.49	25.67	25.27	
	Brasil	28.18	29.36	28.36	29.59	30.59	26.64	20.81	22.38	21.26	20.61	
	Guyana	20.74	19.84	19.73	18.71	15.07	14.13	17.03	19.69	16.28	16.2	
	Venezuela		63.03	4.76	106.52	47.98		40.98	29.43	19.31	12.61	
	Perú*	11.37	11.39	11.88	12.00	11.49	11.94	11.57	2.14	12.98		
	Surinam	1.07	2.11	3.83	5.50	3.74	10.46	1.99	13.55	2.28	11.38	
	Bolivia			3.50	3.89	4.27	3.76	3.34	2.76	2.87	2.72	
	Uruguay	12.62	13.25	14.78	13.46	13.78	12.28	11.49	18.25	16.03	11.19	
Cono Sur	Argentina	7.25	7.54	1.77	6.01	1.83	1.77	1.81	1.64	1.35	1.51	3.03 (sin Brasil)
	Chile	1.22	0.71	0.54	0.99	1.15	1.00	1.31	1.35	0.92	1.48	7.15 (con Brasil)
	Paraguay	1.74	16.61	1.86	1.77	1.80	1.97	1.66	12.39	1.92	0.98	
	Leyenda (muertes por 100 mil)			>40	>30	>25	>20	>15	>10	>5	<1	

*Para calcular el promedio, los datos tomados en cuenta para Perú fueron de 2021.

Fuente: Adaptado de UNODC (2024).

Em 2021, o Brasil registrou mais de 45 mil homicídios intencionais. O perfil das vítimas também pode ser encontrado no portal de dados do UNODC, e aponta que são em sua maioria homens jovens, na faixa etária entre 15 a 44 anos, exatamente a população economicamente ativa (UNODC, 2024). O ponto é que determinados eventos moldaram de forma não intencional o ambiente regional, possibilitando o avanço e a mudança de postura de atores violentos não-estatais na região amazônica.

2. El contexto hemisférico en la década de 1990

Entre 1991 y 2001, tras liberarse de la sombra de la Guerra Fría, el mundo vivió un periodo dinámico y convulso. En la cambiante percepción de la seguridad, gradualmente, conceptos como la seguridad humana, la seguridad ambiental y societal se fueron añadiendo a los preceptos clásicos de seguridad militar, económica y política, creando un híbrido en el que actualmente coexisten preocupaciones de seguridad diferentes (Buzan, Wæver y De Wilde, 1998).

La Utopía Desarmada, del mexicano Jorge Castañeda (1993), sostenía que, con el fin de la Unión Soviética, la lucha armada en América Latina ya no era una opción. El autor no podía estar más equivocado: el 1 de enero de 1994 surgió en su propio país una guerrilla armada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1998, en su apogeo militar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conquistaron la ciudad de Mitú, capital del departamento de Vaupés, en la frontera con Brasil.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la producción y el consumo de cocaína han aumentado en los últimos años, alcanzando la cifra récord de 2.304 toneladas incautadas en 2021.

En esa época, ya existía un proceso de acercamiento a los distintos carteles vinculados a la producción de cocaína que habían surgido en la década anterior. Durante la administración de Richard Nixon, Estados Unidos ya reconocía que las drogas eran un problema, pero fue bajo el mandato de George Bush cuando se declaró la “Guerra contra las Drogas”. En 2000, se anunció el “Plan Colombia”, con más de \$1,3 mil millones destinados a ayuda militar, en la lucha contra las drogas (Herz, 2002). A pesar de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y de la Guerra contra el Terrorismo, la lucha contra el crimen organizado y el narco-tráfico siguió recibiendo el apoyo de los estadounidenses, no siempre con resultados satisfactorios. Un efecto globo acabó extendiendo el cultivo de coca a otros países, bajo el control de nuevos Actores Violentos No Estatales (Fernandez y Pazzona, 2015).

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la producción y el consumo de cocaína han aumentado en los últimos años, alcanzando la cifra récord de 2.304 toneladas incautadas en 2021 (UNODC, 2023a). Diversos eventos internacionales han contribuido, directa e indirectamente, a este aumento. Durante la pandemia de Covid-19, se produjo un aumento de los diversos usos de drogas lícitas e ilícitas como forma de alivio, lo que supuso una oportunidad de expansión para el Crimen Organizado Transnacional (Comolli, 2021). Además de ampliar el mercado ya existente en Estados Unidos y Europa, se incautaron mayores volúmenes de cocaína en África, Asia y Oceanía.

Brasil es una de las rutas de exportación de Cocaína hacia la Unión Europea, Europa del Este y África, una dinámica que se viene observando desde la década de 1990 (Steiman, 1995; Machado, 2009). En el país, dos Actores Violentos No Estatales que nos interesan aquí por su alcance internacional son el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC). A principios de los años noventa, el Comando Vermelho ya existía desde hacía más de una década. Creado en 1979 en el interior de la prisión de Ilha Grande, en Rio de Janeiro, el grupo surgió de la unión de presos políticos con delincuentes comunes (Migowski, 2018). El CV se limitaba a operar en Rio de Janeiro, con poca expresión nacional. A principios del siglo XXI, la organización avanzó hacia Paraguay. En la década siguiente, llegó a la Amazonía. Hoy es posible ver referencias a las facciones en los muros de la periferia de grandes centros urbanos del norte de Brasil, especialmente Manaus y Belém, así como la estructuración de células de los grupos en cárceles de la región (Alessi, 2021). Brasil es una de las rutas de exportación de Cocaína hacia la Unión Europea, Europa del Este y África, una dinámica que se viene observando desde la década de 1990 (Steiman, 1995; Machado, 2009). En el país, dos Actores Violentos No Estatales que nos interesan aquí por su alcance internacional son el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC). A principios de los años noventa, el Comando Vermelho ya existía desde hacía más de una década. Creado en 1979 en el interior de la prisión de Ilha Grande, en Rio de Janeiro, el grupo surgió de la unión de presos políticos con delincuentes comunes (Migowski, 2018). El CV se limitaba a operar en Rio de Janeiro, con poca expresión nacional. A principios del siglo XXI, la organización avanzó hacia Paraguay. En la década siguiente, llegó a la Amazonía. Hoy es posible ver referencias a las facciones en los muros de la periferia de grandes centros urbanos del norte de Brasil, especialmente Manaus y Belém, así como la estructuración de células de los grupos en cárceles de la región (Alessi, 2021).

En 1993, surgió en la Casa de Custodia de Taubaté, en São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC). En la década siguiente, la organización creció dentro de las prisiones y las ciudades, llegando a coordinar atentados contra las fuerzas de seguridad en 2006 y 2012 (Feltran, 2018). En la última década, el PCC se expandió a otros estados, llegando a las fronteras con países vecinos, especialmente Paraguay y Bolivia. Posteriormente, llegó a la región amazónica. Las relaciones entre estas organizaciones criminales han fluctuado desde disputas abiertas y violentas hasta acuerdos de paz y conveniencia (Manso y Dias, 2018). Estas dos organizaciones criminales no son las únicas en el país, pero sí las de mayor capilaridad. Además, han establecido acuerdos de conveniencia con grupos regionales más pequeños y especialmente con otras organizaciones criminales en el exterior.

3. El Acuerdo de Paz con las FARC y la reorganización de los acuerdos entre facciones criminales en la Cuenca Amazónica

Tras décadas de guerra civil que costaron la vida a más de 450.000 personas, en septiembre de 2016 el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz. Aunque el Acuerdo de Paz fue rechazado por la población en un plebiscito celebrado en octubre de ese año, fue ratificado por el Congreso Nacional de Colombia al mes siguiente, en noviembre de 2016.

A lo largo de 2017 se iniciaron dos procesos paralelos. Por un lado, la dirección de las FARC se convirtió en partido político. Por otro lado, se inició el proceso de desarme de los ex guerrilleros, que debían reincorporarse a la vida civil. Sin embargo, al mismo tiempo que parte de las FARC se desmovilizaba, surgieron grupos disidentes que no aceptaban el acuerdo de paz firmado y anunciaron que continuarían la lucha armada. Este proceso de disidencia, no obstante, no fue centralizado: no hubo un nuevo líder único ni un mando centralizado. Diferentes columnas guerrilleras disidentes reivindicaron su autonomía y el control del territorio en el que operaban.

La antigua estructura jerárquica de las FARC se rompió. No existe una base de datos documentada al respecto, pero se puede suponer que, con el fin de la estructura centralizada de la organización y las necesidades de autofinanciación de las disidencias que estaban surgiendo, los antiguos “acuerdos comerciales” de las FARC, diferentes grupos del Crimen Organizado brasileño sufrieron reveses. Las nuevas disidencias buscaron de manera independiente renegociar los acuerdos con respecto a los productos que tenían en sus territorios para capitalizarlos.

Coincidentemente, en Brasil, la paz entre el PCC y el CV terminó en 2017. Como causa de esta ruptura, los estudios apuntan a cuestiones internas sobre la circulación de drogas en las cárceles y al hecho de que el CV había perdido protagonismo en algunos de sus grupos de facción, porque no tenía una estructura centralizada como el PCC (Manso y Dias, 2018). La conclusión fue una explosión de masacres entre los grupos y sus aliados dentro de las prisiones de la región norte. La disputa carcelaria se llevó a las calles y ríos de la región amazónica. En estas disputas, estaba en juego el control de las rutas de la cocaína colombiana hacia los mercados estadounidense y europeo (Ferreira y Framento, 2019). Esto ocurrió al mismo tiempo que surgieron las disidencias de las FARC, que ya no tenían el control central y buscaban reestructurar sus acuerdos comerciales.

Un observador informado de la dinámica del narcotráfico en la región podría argumentar que la cocaína producida en Colombia se distribuye para el comercio internacional predominantemente a través de las rutas marítimas del Océano Pacífico y el Mar Caribe, eliminando la necesidad de transitar por la región de la cuenca Amazónica, lo cual es efectivamente cierto. Sin embargo, es necesario considerar que las disidencias de las FARC, que dominan las regiones al oeste de la Cordillera de los Andes y avanzan hacia la cuenca Amazónica, pueden eventualmente verse privadas del acceso directo a las costas colombianas debido a la pérdida de aliados estratégicos y al surgimiento de rivales. De esta manera, las características topográficas, las redes urbanas y otros elementos de la región pueden llevar a estos grupos a recurrir a los ríos que conforman la cuenca del Amazonas para el flujo de sus productos ilícitos.

Los datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública (2023) corroboran esto al mostrar la presencia de grupos criminales precisamente en las cuencas hidrográficas que componen la red fluvial amazónica y los municipios clave en los nodos fluviales, así como las intersecciones terrestres. Hemos comentado el caso de Brasil-Colombia, pero la reorganización de los acuerdos de conveniencia entre estos grupos tras el acuerdo con las FARC y la aparición de disidencias es un proceso más amplio que también ha afectado a otras fronteras, como las de Ecuador y Venezuela (Millán-Quijano, 2020).

En Ecuador, la creciente afluencia de diferentes Actores Violentos No Estatales y la llegada de plantaciones de coca a su frontera norte (UNODC, 2023a) llevó al país a una escalada de

las características topográficas, las redes urbanas y otros elementos de la región pueden llevar a estos grupos a recurrir a los ríos que conforman la cuenca del Amazonas para el flujo de sus productos ilícitos.

enfrentamientos y choques que culminó con la declaración de estado de guerra interna por parte del actual gobierno (BBC News Brasil, 2024). Como telón de fondo de este proceso, la pandemia de Covid-19 y el aumento de la demanda mundial de la droga calentaron el mercado. En el caso de Venezuela, la fragilidad del Estado ha facilitado el surgimiento de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, capaces de insertarse en este ecosistema y, en asociación con grupos ya establecidos en el continente, redirigir flujos ilícitos, incluyendo drogas, armas, oro y tráfico de personas (Rodrigues, 2024; Insight Crime, 2023).

En resumen, la región amazónica vive una más de las constantes reestructuraciones de coaliciones y pactos comerciales entre diversos grupos, así como enfrentamientos por el dominio de rutas, recursos y mercados. Este período de división territorial de la Amazonía por grupos criminales y violentos, combinado con las características de la región, tiene el potencial de generar zonas donde la gobernabilidad del Estado es efectivamente nula, resultando en un déficit de soberanía. Se trata de un reto que aún no ha sido abordado directamente por los Estados-nación de la región, y que posiblemente excede la capacidad de enfrentarlo de manera aislada por cada uno de ellos.

4. Los riesgos de una soberanía difusa en Amazonía

Existe una lógica económica detrás de la delincuencia, aunque no se aplica a todos los casos: en determinados periodos de la historia, las motivaciones político-ideológicas, los factores socioculturales o causas más profundas también pueden ser un motivador detrás de las acciones violentas (Fernandes, 2020). La lectura de la delincuencia desde una perspectiva económica busca esencialmente entender cómo los beneficios y los castigos influyen en las decisiones de los individuos.

En pocas palabras, como explica Gary Becker (1968), cuando la perspectiva de castigo, ya sea físico o financiero (privación de libertad o una multa), es aceptable considerando las ganancias que el individuo puede obtener a través de la actividad criminal, éste puede, de manera calculada, elegir este camino. En estos casos, el Estado y todo su aparato han sido incapaces de disuadir al individuo de practicar actividades ilícitas o criminales.

Además, existe un debate en torno a los espacios no gobernados, donde el Estado es incapaz de imponer su conjunto de normas, lo que refuerza aún más la perspectiva de Gary Becker sobre la ausencia de punición. Stanislawski (2006) examinó los grados de control y gobernanza que los Estados u otros actores ejercen sobre un territorio, que puede ser un Para-Estado, un Cuasi-Estado o un black spot. Él introduce el concepto de black spot para designar espacios dentro de los estados nacionales que no están controlados de forma efectiva por los que se presentan como soberanos sobre esos territorios. Este fenómeno suele asociarse generalmente a las periferias o comunidades empobrecidas situadas en las grandes ciudades, donde la capacidad de gobernar, es decir, de imponer un conjunto de normas sociales y hacerlas cumplir mediante el monopolio de la violencia, no pertenece al Estado, sino a los Actores Violentos No Estatales. Existen ejemplos de espacios como estos en Brasil, Colombia, Perú y dispersos por las grandes ciudades de los países Amazónicos, con diferentes grados de tamaño y poder (Villa y Pimenta, 2019).

Un punto clave en estos territorios de black spot controlados por Actores Violentos No Estatales es la imposición de su propio código de conducta a la población local a través de la violencia. Estos actores se convierten en motores de la economía local, consumiendo productos de la economía legal, empleando a jóvenes y proporcionando favores a determinados individuos dentro de las comunidades. Esto suele ocurrir en ciudades grandes y medianas, que, al igual que las comunidades donde se encuentran estos black spots, están densamente pobladas. Esto permite que parte de la población conviva con estos actores y sus normas de forma casi invisible, pudiendo optar por no participar, siempre que respeten la ley del silencio y otras reglas impuestas. Sin embargo, en las grandes ciudades es más fácil esconderse en la

La lectura de la delincuencia desde una perspectiva económica busca esencialmente entender cómo los beneficios y los castigos influyen en las decisiones de los individuos.

Desde la década de los 90, la Amazonia se ha convertido en una selva urbanizada: su población se distribuye en pequeños pueblos, aglomeraciones suburbanas, aldeas y pequeñas ciudades.

multitud. En cambio, en los pueblos, las comunidades y las ciudades pequeñas, esto no es tan sencillo. Es en este punto donde empezamos a observar la estructura urbana y social de la región panamazónica, un lugar donde la presencia y la dinámica de los Actores Violentos No Estatales pueden generar un fenómeno distinto al de los black spots, pero más riesgoso para la soberanía estatal a largo plazo.

Desde la década de los 90, la Amazonia se ha convertido en una selva urbanizada: su población se distribuye en pequeños pueblos, aglomeraciones suburbanas, aldeas y pequeñas ciudades, dispersas a lo largo de las orillas de los ríos o cerca de los innumerables ramales, donde viven de la extracción de recursos de la selva y los ríos o de actividades agrícolas a pequeña escala (Becker, 2004). Las poblaciones no pueden esconderse cuando los delincuentes buscan estos territorios para realizar actividades ilícitas, ya que carecen de protección estatal y de alternativas económicas.

Para empezar a pensar en formas de avanzar, debemos considerar el problema como un reto regional, no sólo local.

Los países amazónicos, especialmente Brasil, enfrentan riesgos derivados del control de territorios por parte de Actores Violentos No Estatales. Con un agravante: a diferencia de lo que ocurre en los black spots, serán los Estados los que quedarán restringidos a islas de gobernabilidad y soberanía relativa, principalmente en las ciudades más grandes y en algunas poblaciones de tamaño medio. La mayor parte del territorio estará sometida a una gobernanza cotidiana, en la que una parte de la economía y un conjunto de leyes impuestas por los Actores Violentos No Estatales estarán en vigor con mayor eficacia que las leyes determinadas por los estados. El alcance y la intensidad de este proceso cambiarán según cada país o región fronteriza. Para empezar a pensar en formas de avanzar, debemos considerar el problema como un reto regional, no sólo local.

5. Origen, ruta y destino: la evidente importancia de mirar más allá del local

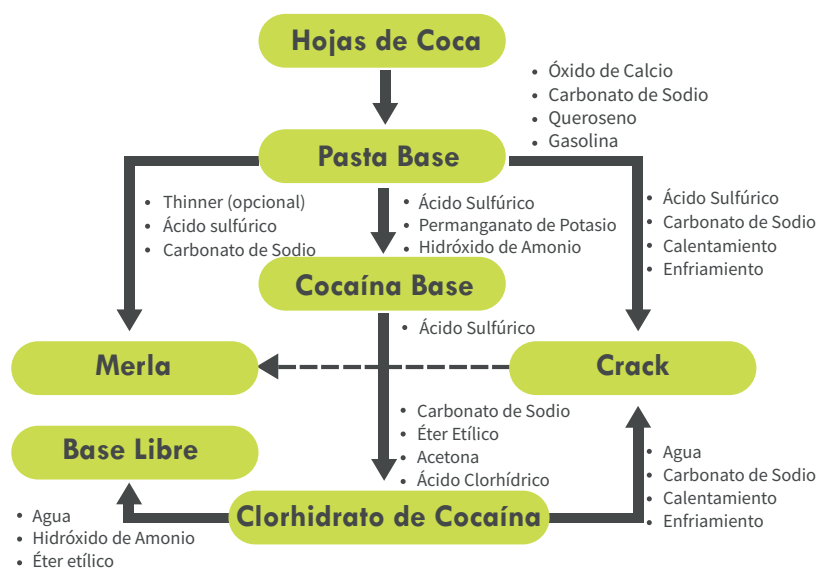
Hay que pensar en orígenes, rutas y destinos, bajo una lógica económica que busque que el delito no pague, pero que el negocio tampoco compense.

El narcotráfico es un problema que trasciende las soluciones locales o nacionales, requiriendo un enfoque que considere su compleja cadena de producción, distribución y consumo, que involucra a múltiples países y atiende a demandas globalizadas. Hay que pensar en orígenes, rutas y destinos, bajo una lógica económica que busque que el delito no pague, pero que el negocio tampoco compense.

Pensando exclusivamente en la cocaína, su cadena productiva puede inducir el establecimiento de otras actividades ilícitas y la utilización de actividades lícitas, creando una zona gris a su alrededor. La plantación de coca y las etapas iniciales de su procesamiento y posterior refinación son los orígenes de esta cadena productiva que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se concentra en tres países amazónicos: Bolivia, Colombia y Perú (UNODC, 2023a).

Estudios sobre la economía de las drogas ilícitas abordan cómo los grupos que controlan los territorios de siembra en estos países buscan regular la producción, suministrar insumos, organizar las compras, el transporte, la seguridad e incluso ofrecer préstamos a los agricultores. Se erigen como agentes reguladores, que incluso imponen normas ambientales y laborales, con el objetivo de crear un entorno ordenado, donde buscan legitimar el monopolio de la violencia y el control del área (Thomson, Meehan y Goodhand, 2024; Millán-Quijano, 2020; Zapata, 2020; Botía, 2017).

En los últimos años se ha producido un aumento de las plantaciones de coca y un incremento de la producción de cocaína (UNODC, 2023c). Como toda actividad agrícola, la siembra requiere insumos y recursos humanos. Las etapas de procesamiento de la hoja de coca hasta la obtención de la cocaína propiamente dicha requieren una serie de productos químicos (figura 2).

Figura 2. Insumos Necesarios para Procesar Cocaína (y Derivados) por Etapas

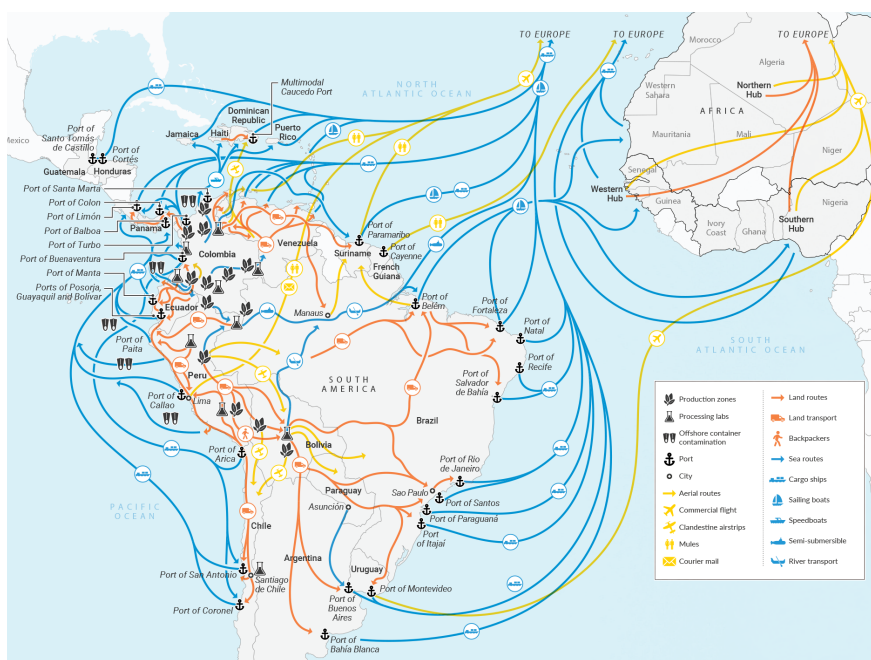
Fuente: Adaptado de Vargas (2001).

Una vez procesadas, la pasta base o cocaína acabada necesitan ser transportadas a los mercados consumidores. El transporte de drogas implica actividades silenciosas y violentas, desde la cooptación de agentes del Estado hasta el homicidio de supuestas amenazas. Otro punto que vale la pena aclarar es que esas rutas suelen ser multimodales y fraccionadas, lo que exige el establecimiento de una red de personas de confianza que es tan importante como los propios lugares físicos (Pinho, Rodrigues y Zambon, 2023).

La fragmentación permite a los operadores ajustar rápidamente sus rutas ante contratiempos o la presencia de fuerzas de seguridad, utilizando desde pequeñas pistas de aterrizaje hasta grandes puertos. Desde la década de los 90, los carteles mexicanos organizan sus actividades en células, una estrategia habitual en el Crimen Organizado Transnacional.

Hay que identificar dónde están los cuellos de botella logísticos de las rutas del narcotráfico y de los delitos conexos, como los delitos ambientales.

Hay que identificar dónde están los cuellos de botella logísticos de las rutas del narcotráfico y de los delitos conexos, como los delitos ambientales. ¿Dónde están las regiones donde la densidad de carreteras, vías fluviales, o pistas de aterrizaje es menor y la instalación de bases de control (terrestres y fluviales), combinada con la destrucción racional de pistas de aterrizaje, puede realmente estrangular la cadena logística del crimen? Por lo tanto, es necesario ser más eficiente, causando más daño o haciendo inviables esas rutas durante más tiempo, hasta que estos actores puedan estructurar otras. Surgirán nuevas rutas, por lo que se necesitan métodos de análisis basados en pruebas, una comprensión de la dinámica interconectada entre orígenes y destinos, y la flexibilidad necesaria para reevaluar constantemente las respuestas.

Figura 3. Rotas del tráfico de cocaína para a Europa

Fuente: Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2021, p. 3).

En el otro extremo de la línea se encuentran los destinos, establecidos por demandas que pueden ser locales o internacionales. El último informe de la UNODC estima que 22 millones de adultos consumen cocaína, lo que representa alrededor del 0,4% de la población mundial (UNODC, 2023a). En Estados Unidos y algunos países europeos, el consumo de cocaína se considera un problema de salud pública desde hace décadas (Adams y Durell, 1984).

Los mercados estadounidense y europeo son los principales destinos, seguidos de Brasil.

Los mercados estadounidense y europeo son los principales destinos, seguidos de Brasil. En Sudamérica existe un consumo local de cocaína; sin embargo, una diferencia sustancial entre el mercado sudamericano y el extranjero es el valor de la cocaína y, en consecuencia, el beneficio que se puede obtener de su comercialización. Según un estudio de la Policía Nacional de Colombia, en 2020 el precio medio del kilo de clorhidrato de cocaína en Colombia era alrededor de US\$ 1.389,00. En Brasil, el precio ya había subido a cerca de US\$ 3.000,00. El salto se produce cuando la droga llega al extranjero. En Estados Unidos, el precio del kilo alcanzó los US\$ 32.000,00. En Europa, los precios son aún más altos. En Portugal y España, dos países que son puerta de entrada de la droga, el precio del kilo se estimó en más de US\$ 39.000,00. En países con mayor poder adquisitivo y demanda, el precio sube: Inglaterra, US\$ 40.600,00; Italia y Alemania US\$ 42.900,00; Croacia y Austria por encima de US\$ 45.000,00 (Colombia/ Policía Nacional, 2020). Además de estos mercados tradicionales, el tráfico de cocaína se ha expandido a África y Asia. Este último, el continente más poblado y con algunas de las mayores economías del mundo, como India, China, Japón, Corea del Sur e Indonesia, así como Australia en Oceanía. Mientras la demanda siga sin mitigarse, el resto de la cadena de cultivo, producción y distribución seguirá buscando formas de abastecer el mercado.

6. Consideraciones Finales

Por la naturaleza de su institución, los Estados están destinados a vivir tanto tiempo como el género humano o la ley natural, o, aún, tanto como la propia justicia, que les da vida. Así, cuando son disueltos, no por violencia externa, sino por desorden interno, la culpa no recae en los hombres como materia, sino en los hombres en cuanto modeladores y organizadores del Estado.

Thomas Hobbes, [1651] 2012. p.225 , traducción propia.

Brasil puede servir de escenario, pero no puede liderar por sí solo el diseño de estrategias eficaces contra la amenaza que supone la continua pérdida de control del Estado sobre diferentes regiones del país a manos del Crimen Organizado Transnacional.

Para inventar el Brasil que queremos, más seguro y próspero, tenemos que unirnos a varios países sudamericanos e inventar el continente que queremos.

Con el resurgimiento de las guerras interestatales en Europa y los posibles conflictos en Asia, la amenaza a la soberanía nacional es una realidad. Sin embargo, en esta lógica, corremos el riesgo de limitarnos a considerar la soberanía nacional solo en estos términos, donde el enemigo es un agente externo, perdiendo así la oportunidad de ver las debilidades internas antes de que sea demasiado tarde o demasiado costoso recuperar la soberanía.

Brasil puede servir de escenario, pero no puede liderar por sí solo el diseño de estrategias eficaces contra la amenaza que supone la continua pérdida de control del Estado sobre diferentes regiones del país a manos del Crimen Organizado Transnacional. El consenso de que este tipo de actores representa una amenaza para el Estado ya existe para otros países amazónicos. Aunque la rigidez y conveniencia de esta convicción puede ser más o menos matizada en algunos países, en otros se da por sentada.

Las soluciones para la Amazonía deben implicar a todos los lados de las fronteras y a las distintas expresiones del poder nacional. Las respuestas tácticas deben ser coordinadas y multifuncionales, pero sin un compromiso político y estratégico duradero, la represión y las iniciativas de desarrollo regional tendrán poca eficacia.

Históricamente, la presencia militar ha sido crucial para la Amazonia. Hoy, es necesario reforzar la presencia del Estado en las fronteras, ofreciendo alternativas de seguridad, educación y desarrollo para evitar que las poblaciones se asocien con grupos criminales.

Darcy Ribeiro, en un documental sobre su obra El pueblo brasileño decía que teníamos que inventar el Brasil que queremos. Para inventar el Brasil que queremos, más seguro y próspero, tenemos que unirnos a varios países sudamericanos e inventar el continente que queremos. O al menos, darnos cuenta de lo que no queremos en nuestro futuro común como región. ■

Referencias

1. Adams, E. y Durell, J. (1984) 'Cocaine: A growing public health problem', in Grabowski, J. (ed.) Cocaine: Pharmacology, Effects, and Treatment of Abuse. National Institute on Drug Abuse Research Monograph, vol. 50, pp.9-14.
2. Alessi, G. (2021) 'Após anos de massacres, hegemonia das facções reduz homicídios em prisões do Amazonas e Roraima', El País Brasil, 25 de febrero.
3. BBC News Brasil (2024) 'Por que Equador declarou "conflicto armado interno" após múltiplos ataques de criminosos', BBC News Brasil, 09 Enero.
4. Becker, B. (2004) Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro: Garamond.
5. Becker, G. (1968) 'Crime and punishment: An economic approach', Journal of Political Economy, vol. 76, no. 2, pp.169-217.
6. Botía, C. Z. (2017) 'Estado, conflitos ambientais e violência na fronteira Amazônica de Brasil, Colômbia e Peru', Revista de Paz y Conflictos, vol. 10, no. 1, pp.113-136.
7. Buzan, B., Wæver, O. y De Wilde, J. (1998) Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.
8. Castañeda, J. (1993) La utopía desarmada. México: Joaquín Mortiz.
9. Colombia/Policía Nacional (2020) Análisis del Mercado de la Cocaína 2020. Bogotá: Dirección de Antinarcóticos y Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico.
10. Comolli, V. (2021) 'Organized crime during and after the pandemic', in Global Security in Times of Covid-19: Brave New World?. Cham: Springer International Publishing, pp.245-271.
11. Feltran, G. (2018) Irmãos: Uma história do PCC. São Paulo: Companhia das Letras.
12. Fernandes, F. (2020) A função social da guerra na sociedade tupinambá. Editora Contracorrente.
13. Fernandez, J. y Pazzona, M. (2015) 'Evaluating the Spillover Effects of the Plan Colombia in Ecuador', Bath Economics Research Working Papers, vol. 41/15. Department of Economics, University of Bath.
14. Ferreira, M. A. y Framento, R. de S. (2019) 'Degradação da Paz no Norte do Brasil: o conflito entre Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte (FDN)', Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais, vol. 4, no. 2, pp. 91-114.
15. Fórum Brasileiro de Segurança Pública [FBSP] (2023) Cartografias da violência na Amazônia [libro electrónico]. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
16. Herz, M. (2002) 'Política de segurança dos EUA para a América Latina após o final da Guerra Fria', Estudos Avançados, vol. 16, pp. 85-104.
17. Hobbes, T. (2012) Leviatã. Traducción Rosina D'Angina. São Paulo: Martin Claret.
18. Insight Crime (2023) 'Tren de Aragua', Insight Crime, 14 Febrero. Disponible en: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/tren-de-aragua/>

19. Machado, L. O. (2009) 'Tráfico de drogas ilícitas e território: o caso do Brasil', in *La Economía de las Drogas Ilícitas. Escenários de conflictos y Derechos Humanos*. Barcelona: Colectivo Maloka, pp.123-139.
20. Manso, B. y Dias, C. (2018) *A Guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil*. 1st ed. São Paulo: Editora Todavia.
21. Migowski, E. (2018) 'As origens do Comando Vermelho explicam por que o Brasil é tão violento', *Voyage*, 15 Enero.
22. Millán-Quijano, J. (2020) 'Internal cocaine trafficking and armed violence in Colombia', *Economic Inquiry*, vol. 58, no. 2, pp.624-641.
23. Pinho, I., Rodrigues, F. y Zambon, G. (2023) 'Navegar é preciso: As jornadas da cocaína e a expansão das facções pelo Brasil', *Novos estudos CEBRAP*, vol. 42, pp.41-58.
24. Rodrigues, L. B. (2024) 'Sobre a dinâmica de atores não-estatais violentos: um estudo de caso da crise nas Terras Yanomamis', *Conjuntura Austral*, vol. 15, no. 69, pp.48-63.
25. Stanislawski, B. H. (2006) *Black Spots: Insecurity from beyond the horizon*.
26. Steiman, R. (1995) 'O Mapa da Droga' (Monografia). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro.
27. Thomson, F., Meehan, P. y Goodhand, J. (2024) 'The political economy of illicit drug crops: forum introduction', *The Journal of Peasant Studies*, pp.1-38.
28. UNODC (2023a) *The World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations.
29. UNODC (2023b) 'Developments and emerging trends in selected drug markets', in UNODC (ed.) *World Drug Report 2023* (Chapter 8). Vienna: United Nations.
30. UNODC (2023c) *Global report on Cocaine 2023 – Local dynamics, global challenges*. United Nations: United Nations publication.
31. UNODC (2024) 'Dados sobre homicídios intencionais'. Disponible en: <https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims>. Consultado el: 10 de junio de 2024.
32. Vargas, R. M. 'Determinação do DNA da Cocaína'. *Perícia Federal*, Brasília, 2001, pp. 16-21.
33. Villa, R. D. y Pimenta, M. C. S. (2019) 'Violent non-state actors and new forms of governance: exploring the Colombian and Venezuelan border zone', *Journal of Human Security*, vol. 15, no. 1, pp. 6-18.
34. Zapata, G. Y. V. (2020) 'Problemas medioambientales de la minería aurífera ilegal en Madre de Dios (Perú)', *Observatorio medioambiental*, vol. 23, p. 229.